

13/04/2009
Política
Chile y el populismo

13/04/2009
Economía
Rifí entre los hombres, la guerra de las farmacias

06/04/2009
Política
Por un puñado de dólares

06/04/2009
Política
Una mirada a la crisis global desde el progresismo (notas acerca de una Cumbre)

06/04/2009
Sociedad
La naturalización de las violencias en el espacio escolar en Chile

30/03/2009
Política
Pensar y proponer un orden global progresista post-neoliberal

30/03/2009
Economía
Piñera y su débil propuesta

Acerca de

Este informe ha sido preparado por el Consejo Editorial de asuntospublicos.ced.cl.

©2000 asuntospublicos.ced.cl. Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción, total o parcial, de lo publicado en este informe con sólo indicar la fuente.

Informe N° 700

Política

13/04/2009

Chile y el populismo

Joaquín Fernández Abara (1)

El siglo XX latinoamericano ha estado cruzado por la presencia del populismo. La crisis de los estados oligárquicos a comienzos del siglo XX, y la incorporación de sectores obreros y mesocráticos a la vida política, se dieron en un marco de crítica al liberalismo. Así, el surgimiento de la política de masas vino aparejado a una deslegitimación de las instituciones liberal-parlamentarias. No era de extrañar que movimientos caudillistas, legitimados democráticamente, pero a la vez indiferentes a las libertades públicas heredadas del constitucionalismo liberal, se apropiasen de la escena política. Estos movimientos reivindicaron la figura del "hombre común", buscando la "virtud" en el "pueblo" y sus tradiciones, los que representarían la esencia de la nacionalidad. De esta manera, socavaban el rol de los partidos políticos y desinstitucionalizaban la política. Estos movimientos populistas tuvieron originalmente rasgos fuertemente antioligárquicos. Así, los movimientos populistas latinoamericanos desde la segunda década del siglo XX hasta la década de 1970 han sido rotulados como "populistas clásicos". Sin embargo hacia la década de 1990, con la crisis del modelo desarrollista nuevos liderazgos surgieron en América Latina. Estos mantenían el afán de identificarse con el pueblo, atacando a los partidos y, en general, a los referentes institucionalizados de representación política. En lugar de la mediación de los partidos, privilegiaron los liderazgos personalistas, a la vez que manifestaron una fuerte indiferencia hacia las libertades públicas. Pero a diferencia de los movimientos populistas clásicos, abandonaron la tónica antioligárquica y las políticas de desarrollo nacionalista, para ponerse a la cabeza de proyectos de reforma neoliberal. Estos movimientos, han sido llamados "neopopulistas".

En el presente artículo analizaremos la presencia del populismo en Chile, centrándonos en las corrientes populistas clásicas y neopopulistas.

El populismo clásico (1920-1958)

Si queremos entender el desarrollo de las corrientes populistas en Chile, es necesario tener en cuenta que el proceso de incorporación política de las demandas de los sectores obreros y mesocráticos urbanos, en la primera mitad del siglo XX, se dio en un marco identitario-cultural caracterizado por el nacionalismo esencialista y el rescate de la cultura popular. De este modo, la llamada "crisis del estado oligárquico" no sólo se habría caracterizado por la entrada

en escena de nuevos actores sociales, sino también por la crítica al liberalismo y al cosmopolitismo que habrían distinguido a las élites decimonónicas. Así, la reivindicación de “lo popular” surgió como una alternativa a las lógicas del estado oligárquico, legitimándose en un discurso nacionalista.

Por esta razón, se vuelve necesario poner atención a cómo se definía “lo popular” en el período. A nuestro juicio, habría prevalecido un discurso en que se asociaba “lo popular” con la “chilenidad”, reforzando la idea de “unidad nacional”. Este sentido de comunidad se habría contrapuesto tanto a la oligarquía tradicional como a las corrientes revolucionarias universalistas, cuales eran el socialismo marxista y el anarquismo, las que habrían sido vistas como antipatrióticas y antipopulares. Esta noción de pueblo, antioligárquica y a la vez integracionista habría sido reivindicada por las corrientes de reforma social más importantes del período. Dicha forma de identidad llegó a ser el correlato discursivo e identitario del naciente “Estado de compromiso”.

Las corrientes políticas movilizadas en torno a dicha noción amplia de “pueblo”, fueron variadas y heterogéneas. De hecho, desde mediados de los años veinte en adelante, transitaron desde el reformismo liberal hasta el populismo. En efecto, en un comienzo, se recurrió a dicha noción como una manera de salvar las instituciones democrático-liberales de una posible destrucción derivada de conflictos sociales. Dicho discurso, que en parte ya estaba presente en el liberalismo popular del siglo XIX, fue reivindicado como bandera de lucha por el Partido Radical y parte del Liberal ante los problemas derivados de la cuestión social, transformándose en la principal bandera de lucha de la Alianza Liberal y, en un sentido más general, del Alessandrismo en la elección presidencial de 1920.

Sin embargo, esta conceptualización de pueblo pasó a ser reivindicada por nuevos actores políticos como una legitimidad superior a las instituciones políticas democrático liberales, las que en muchos casos pasaron a ser vistas como una traba para el proceso de modernización y las reformas sociales. De este modo, surgieron diversas corrientes antiliberales y con tendencias al autoritarismo, las que si bien reivindicaron dicha noción de pueblo, progresivamente fueron alejándose de su matriz liberal reformista. En general, se caracterizaron por depender de liderazgos carismáticos, por su fuerte retórica nacionalista, su exaltación de la autoridad presidencial, su tendencia a pasar por encima de las instituciones del constitucionalismo liberal y, por ende, su afán de satisfacer las demandas sociales de manera inmediata, saltándose los tiempos lentos propios de dichas instituciones.

El itinerario de dicha transformación comenzó a notarse en 1920. En la elección presidencial de dicho año, el reformismo social antioligárquico de Arturo Alessandri se caracterizó por su personalismo caudillista y por recurrir al uso de la movilización popular, por causas extrainstitucionales, como mecanismo de resolución de conflictos políticos. Cabe recordar además, la rápida evolución sufrida por el alessandrismo en la primera mitad de la década de 1920 hacia el antiparlamentarismo y la exaltación de la autoridad –cuando no el autoritarismo- presidencial. Sin embargo, fue con las intervenciones militares en política de mediados de la década de 1920, especialmente en el caso de los “oficiales jóvenes”, que el discurso antioligárquico y la interpelación a una identidad colectiva de pueblo-patria, de carácter integracionista, adquirieron rasgos abiertamente populistas. En su propuesta de ensalzar la unidad nacional por sobre las divisiones de clase, y en sus afanes de modernización y reforma social, los militares reformistas hicieron gala de una abierta desconfianza y rechazo a la política partidista, además de una praxis caracterizada por la indiferencia hacia las garantías establecidas por el constitucionalismo liberal.

Estas tendencias llegaron a su apogeo durante la Dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y su proyecto del "Chile Nuevo", entre los años 1927 y 1931. Como militar reformista y autoritario Ibáñez continuó con la labor de reforma social del alessandrismo y emprendió una campaña de modernización del Estado. Al mismo tiempo, reforzó su poder personal, sobrepasando a los partidos y a otros referentes institucionales de representación política. Apelando a una legitimidad masiva, e incluso democrática, desarrolló una política profundamente antiliberal, en la que él, como líder carismático, buscó identificarse con un pueblo interclasista, alejado de una supuesta anti-patria representada tanto por la reacción oligárquica como por las corrientes contestatarias y clasistas de izquierda. No deben extrañarnos entonces, sus intenciones de controlar el sindicalismo; sus afanes –por lo demás exitosos– por dividir, debilitar y controlar a los partidos políticos; sus devaneos corporativistas, expresados en la formación de las CRAC; y la tendencia de parte importante de la opinión pública a compararlo con Miguel Primo de Rivera, y en algunos casos, con el propio Benito Mussolini.

Si bien la experiencia del militarismo autoritario y reformista vivió una profunda crisis tras la caída de Ibáñez, sus proyecciones se hicieron sentir en la política chilena por varios años más.

Debemos tener en cuenta que el Partido Socialista, en sus orígenes tuvo fuertes rasgos nacional-populares. Su espectacular crecimiento en la década de 1930 se debió, en gran parte al arrastre electoral del liderazgo carismático e Marmaduke Grove: un militar reformista que había entrado en política junto a Carlos Ibáñez del Campo y que tras un golpe de estado había instaurado en Chile una República Socialista en junio de 1932. En sus orígenes el socialismo chileno pugó por constituirse en una alternativa socialista nacionalista y latinoamericanista, ajena al comunismo de la tercera internacional y a la socialdemocracia. Sus fuertes vínculos con el APRA peruano, del cual tomó parte importantísima de su simbología, fueron fiel reflejo de estas tendencias. No es extraño que hacia comienzos de 1950, las facciones mayoritarias del socialismo chileno vieran en la figura de Ibáñez al catalizador de un amplio movimiento popular y lo acompañaran en su candidatura presidencial de 1952. Sin embargo, los devaneos populistas en el Partido Socialista fueron pronto abandonados. Factor clave en este sentido fue el liderazgo de Salvador Allende, quien en las elecciones de 1952 se negó a apoyar la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo y forjó una alianza con el Partido Comunista, el denominado "Frente del Pueblo", antecesor del FRAP o Frente de Acción Popular. En el rechazo al ibañismo propiciado por Allende, se mezclan cierta dosis de doctrinarismo marxista, representada en la opción de reforzar una alianza entre "partidos de trabajadores", con una cultura política liberal de larga data, defensora de las libertades públicas y recelosa del populismo autoritario de Ibáñez.

Podemos considerar que el ibañismo ha sido la experiencia populista de más largo alcance temporal en la política chilena. Se trataba de una heterogénea corriente, reunida en torno al liderazgo carismático de Carlos Ibáñez del Campo. Debemos recordar que Ibáñez se caracterizaba por ser un hombre parco y por sus dificultades para cautivar mediante la oratoria, sin embargo, su carisma tenía otros fundamentos, y estos se encontraban en la memoria de su dictadura, entre los años 1927 y 1931. En efecto, en dicho gobierno, el militar reforzó una imagen de orden, autoridad y modernización, a la vez que de imparcialidad social. Dicha imagen se transformó en su principal capital político en los años posteriores. Reforzando este mito histórico, a la vez que recurriendo a un discurso, una simbología y una ritualidad política fuertemente nacionalista, el ibañismo intentó movilizar a un electorado pluriclasista, especialmente al de carácter "independiente" que no tenía filiaciones políticas estables. Sin embargo, no debemos pensar por eso que actuaba sobre el electorado como una suerte de tábula rasa, muy por el contrario, su discurso fue capaz de capitalizar las ansias de integración social y la cultura nacionalista común entre parte importante de la ciudadanía. En este afán, el ibañismo resaltó la figura del "hombre común", es decir del

ciudadano “trabajador” y “ordenado”, pero ajeno al poder político o económico, identificándolo en la figura carismática de su líder. De esta manera, la noción integracionista, antioligárquica y nacionalista de “pueblo” se unía a la adhesión a una figura de autoridad personalista.

El “cuerpo doctrinal” del ibañismo fue extremadamente básico, laxo y variable, transitando sin mayores dificultades de izquierda a derecha en muy poco tiempo y mostrando cierta indiferencia e impermeabilidad a los nuevos clivajes que dividían al sistema de partidos. Sin embargo, tuvo unos pocos elementos invariables, y estos eran la exaltación de la autoridad presidencial y el nacionalismo. En relación al problema de la autoridad presidencial, llama la atención como en todas las campañas presidenciales de Ibáñez, pero especialmente en las de 1942 y 1952, el ibañismo insistió en la necesidad de reafirmar la autoridad del Ejecutivo. Ibáñez, ex militar y hombre fuerte, era mostrado como el único hombre capaz de llevar a la práctica los principios presidencialistas que inspiraban a la constitución de 1925, y que en la práctica aún no habían sido asimilados por todos los partidos políticos. Con respecto al nacionalismo, basta recordar como en todas las campañas de Ibáñez hubo un fuerte despliegue de simbología nacionalista, con la que se pretendía dar una sensación de unidad por sobre las divisiones partidistas. En el afán de reivindicar el autoritarismo presidencial y los mitos nacionalistas, el ibañismo nunca se cansó de resaltar el carácter militar de su candidato e invocó la memoria histórica de los presidentes autoritarios del siglo XIX, trazando líneas de continuidad imaginarias con las figuras de Diego Portales y José Manuel Balmaceda.

Una vez en el poder, tras la victoria en las elecciones de 1952, el populismo ibañista desarrolló un programa que recordaba en algunos aspectos la primera administración del ex dictador. La primera fase de este segundo gobierno de Ibáñez, que llegó hasta, aproximadamente, el año 1955 puede ser considerada como un “período populista”. El Presidente contó con el apoyo de los movimientos ibañistas, del Partido Agrario Laborista y, en un comienzo, del Partido Socialista Popular. Más importante que los cambios en la conformación de los gabinetes, fueron algunas características de la acción gubernativa que le dieron continuidad al período. Según Tomás Moulian, estas habrían sido “la pretensión de favorecer a los trabajadores, de controlar a los ‘clanes económicos’, de aumentar la intervención del Estado, de favorecer la autoridad presidencial –aunque sin caer en los excesos dictatoriales que muchos adherentes demandaban que el presidente volviera a ejercer–, de criticar los ‘excesos del parlamento’, y de preocuparse más por el crecimiento que por la inflación”.

Sin embargo, la crisis del modelo desarrollista y del estado de compromiso no pudo ser conjurada. La inflación y las bajas tasas de crecimiento conspiraban contra las expectativas de los grupos con capacidad de movilización social. El gobierno de Ibáñez se volcó, aunque de manera incompleta, hacia políticas de liberalización, buscando de este modo reactivar la economía. Así, el gobierno debió apoyarse en el parlamento en los partidos históricos de la derecha: liberales y conservadores. El populismo ibañista había entrado en una crisis terminal que ya quedó en evidencia en las elecciones parlamentarias de 1957. El General abandonó el poder en 1958 y murió dos años después. El ibañismo desapareció con él.

El neopulismo (de 1973 hasta la actualidad)

El advenimiento de la década de los 90 replanteó el modo de comprender el populismo en América Latina. La implementación de las reformas económicas neoliberales no trajo aparejada un proceso de fortalecimiento institucional en torno a valores democrático-liberales. Muy por el contrario, varias de estas reformas fueron implementadas en contextos de autoritarismo político en la década de los 70 y 80 –con distintos niveles de efectividad– o por líderes carismáticos con un escaso respeto por los ordenamientos constitucionales

en la década de 1990. Liderazgos como el de Carlos Saúl Menem en Argentina, y especialmente Alberto Fujimori en Perú, dan cuenta de este cambio de tendencias. En la actualidad, el gobierno de Uribe en Colombia, muestra algunas características similares.

En efecto, varios de estos líderes personalistas pasaron por encima de sus ordenamientos constitucionales. Utilizando mecanismos plebiscitarios y recurriendo a formalidades electorales, vulneraron reglas preestablecidas del juego democrático, de la separación de poderes del estado y, en muchos casos, las libertades públicas. Tras su paso, los sistemas de partidos quedaron sumidos en una secuela de anarquía, desorganización y desafección pública.

Estos líderes han sido llamados neopopulistas. El neopopulismo mantiene la indiferencia hacia el constitucionalismo político liberal y del mismo modo que busca ensalzar a la gente común. Al mismo tiempo, mantiene su dependencia del arrastre generado por figuras personalistas.

No debemos olvidar que esta nueva forma de identidad política fue una suerte de correlato de la crisis terminal del Estado de compromiso y de las mermas de las políticas de bienestar social. De este modo los líderes populistas movilizan las demandas y temores de estos grupos recurriendo a un discurso pro-empresarial, designando bajo el rótulo de "emprendedor" las más diversas formas de trabajo independiente, y muchas veces informal, que han crecido con los cambios sufridos por la estructura productiva.

Así, este nuevo populismo se caracterizaría por el decaimiento de su contenido antioligárquico, representando a clases medias y bajas "aspiracionales" que, producto de su inseguridad de status, buscan diferenciarse simbólicamente de los estratos más bajos y marginales de la sociedad. De este modo, son capaces de generar una base de respaldo "popular" a las reformas neoliberales.

En el caso chileno, varias de estas características pueden ser percibidas desde la década de 1970 hasta ahora. Una primera aproximación puede ser vista en el "pinochetismo popular". Este sector se compuso especialmente por fragmentos del mundo poblacional, que en algún momento se sintieron amenazados por la hipermovilización generada en el período de la Unidad Popular y que desarrollaron un anticomunismo visceral y una fuerte aspiración a la implantación de "orden" y "mano dura". Estos sectores fueron cooptados en la década de 1980 por el gremialismo, al alero de las políticas clientelísticas desarrolladas por la dictadura de Pinochet, especialmente con miras al plebiscito de 1988. De este modo, jóvenes provenientes de ambientes de la clase alta tradicional de Chile, lograron conseguir una base de apoyo popular pro-autoritaria y combativa, funcional a su proyecto de implementación y mantención de una "democracia protegida".

En este sentido, la UDI tiene muchos rasgos de los neopopulismos latinoamericanos. Algunos de ellos son su exaltación del hombre común y de los "independientes" frente a los políticos, junto con su afán de erosionar el prestigio de los referentes institucionalizados de representación política. Llama la atención, también, su indiferencia a las garantías básicas e instituciones mínimas del constitucionalismo liberal, que se hace presente especialmente al tratar los temas vinculados con la "seguridad ciudadana". No es extraño que Joaquín Lavín, en su momento mirara como un ejemplo al Perú de Fujimori, y que en la actualidad incluso Sebastian Piñera muestre su admiración por la "eficiencia" y el modo de hacer política de Uribe en Colombia o de Calderón en México.

La UDI ha captado el afán aspiracional de parte de las clases bajas y medias. En efecto, la identidad colectiva invocada por la UDI ya no apunta a la categoría de "pueblo", que en general daba cabida a los estratos más bajos, sino a la "gente", haciéndose eco del afán de distinguirse de lo popular. El paso de la glorificación del "roto heroico" al rechazo del "flaute indeseable", ha sido comprendido por este movimiento político. El abuso de medidas demagógicas en las luchas antidelinuencia, que siempre están cargadas de un inevitable sesgo clasista, ayudan en este afán de distinguir a los sectores con aspiraciones de ascenso social.

La tarea de las fuerzas progresistas, enfrentadas a estos liderazgos populistas, es tratar de encauzar las legítimas aspiraciones de ascenso social y seguridad dentro de los márgenes de un constitucionalismo respetuoso de las libertades públicas. A la vez, dentro del ámbito de las políticas sociales y culturales, deben apuntar a la creación de identidades integradoras, fomentando la cohesión y combatiendo la marginalidad en todas sus dimensiones. Para proseguir en la lucha por la creación de una sociedad de garantías y mayores libertades individuales es imprescindible reforzar y legitimar una democracia de instituciones, rechazando los personalismos y el afán de desprestigiar la política.

(1) Joaquín Fernández Abara, Universidad Alberto Hurtado; Instituto Igualdad.